

PRESENTACIÓN  
*José Thompson J*

O COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS,  
SOCIAIS E CULTURAIS DAS NAÇÕES UNIDAS  
E O ENFRENTAMENTO À COVID-19  
*RENATO ZERBINI RIBEIRO LEÃO*

A CRISE DO SARS-COV-2 E O (FIM DO) INDIVIDUALISMO NACIONALISTA:  
A PROMOÇÃO DAS DIRETRIZES DO SIDH NA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NO BRASIL  
*MURILO BORGES*  
*VINICIUS VILLANI ABRANTES*

EL DERECHO A LA VIVIENDA EN EL CONTEXTO  
DE LA PANDEMIA MUNDIAL  
*ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ*

LA CORRUPCIÓN EN LA EMERGENCIA: REPERCUSIONES SOBRE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
*FRANCO GATTI*

“MENOS PEDRAS, MAIS FLORES”:  
PELO DIREITO À UMA CIDADE MAIS HUMANA EM TEMPOS DE PANDEMIA  
*ANA CÉLIA PASSOS PEREIRA CAMPOS*  
*IGOR DE SOUZA RODRIGUES*

LÍMITES CONVENCIONALES A LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y RESPUESTAS A LA PANDEMIA  
*MARCOS ANTONIO VELA ÁVALOS*

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19:  
¿DERECHO O PRIVILEGIO? EL CASO DEL ECUADOR  
*CAMILA YÁNEZ COELLO*

Julio - Diciembre 2020

72

Julio - Diciembre 2020



Embajada de Noruega  
Ciudad de México



REVISTA  
**IIDH**

Instituto Interamericano de Derechos Humanos  
Institut Interaméricain des Droits de l'Homme  
Instituto Interamericano de Direitos Humanos  
Inter-American Institute of Human Rights

Revista  
341.481

Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos Humanos.-Nº1 (Enero/junio 1985)  
-San José, C. R.: El Instituto, 1985-  
v.; 23 cm.

Semestral

ISSN 1015-5074

1. Derechos humanos-Publicaciones periódicas

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta Revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente con las del IIDH o las de sus donantes.

Esta revista no puede ser reproducida en todo o en parte, salvo permiso escrito de los editores.

*Corrección de estilo: Español: José Benjamín Cuéllar M.  
Portugués: Maria Gabriela Sancho Guevara*

*Portada, diagramación y artes finales: Marialyna Villafranca Salom*

*Impresión litográfica: Litografía Imprenta Aguilar*

La Revista IIDH acogerá artículos inéditos en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, que hagan énfasis en la temática de los derechos humanos. Los artículos deberán dirigirse a: Editores Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

*Se solicita atender a las normas siguientes:*

1. Se entregará un documento en formato digital que debe ser de 45 páginas, tamaño carta, escritos en Times New Roman 12, a espacio y medio.
2. Las citas deberán seguir el siguiente formato: apellidos y nombre del autor o compilador; título de la obra (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada. Para artículos de revistas: apellidos y nombre del autor, título del artículo (entre comillas); nombre de la revista (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada.
3. La bibliografía seguirá las normas citadas y estará ordenada alfabéticamente, según los apellidos de los autores.
4. Un resumen de una página tamaño carta, acompañará a todo trabajo sometido.
5. En una hoja aparte, el autor indicará los datos que permitan su fácil localización (Nº fax, telef., dirección postal y correo electrónico). Además incluirá un breve resumen de sus datos académicos y profesionales.
6. Se aceptarán para su consideración todos los textos, pero no habrá compromiso para su devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

La Revista IIDH es publicada semestralmente. El precio anual es de US \$40,00. El precio del número suelto es de US\$ 25,00. Estos precios incluyen el costo de envío por correo regular.

Todos los pagos deben de ser hechos en cheques de bancos norteamericanos o giros postales, a nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Residentes en Costa Rica pueden utilizar cheques locales en dólares. Se requiere el pago previo para cualquier envío.

Las instituciones académicas, interesadas en adquirir la Revista IIDH, mediante canje de sus propias publicaciones y aquellas personas o instituciones interesadas en suscribirse a la misma, favor dirigirse al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico: s.especiales2@iidh.ed.cr.

**Publicación coordinada por Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH**

**Instituto Interamericano de Derechos Humanos**  
Apartado Postal 10.081-1000 San José, Costa Rica  
Tel.: (506) 2234-0404 Fax: (506) 2234-0955  
e-mail:s.especiales2@iidh.ed.cr  
**www.iidh.ed.cr**

## Índice

### Presentación..... 7

*José Thompson J.*

### O comitê de direitos econômicos, sociais e culturais das nações unidas e o enfrentamento à COVID-19 ..... 13

*Renato Zerbini Ribeiro Leão*

### A crise do SARS-COV-2 E o (fim do) individualismo nacionalista: a promoção das diretrizes do SIDH na proteção dos refugiados no Brasil..... 49

*Murilo Borges*

*Vinicius Villani Abrantes*

### El derecho a la vivienda en el contexto de la pandemia mundial..... 71

*Alejandro Díaz Pérez*

### La corrupción en la emergencia: repercusiones sobre los derechos humanos..... 89

*Franco Gatti*

### “Menos Pedras, Mais Flores”: Pelo direito à uma cidade mais humana em tempos de pandemia..... 113

*Ana Célia Passos Pereira Campos*

*Igor de Souza Rodrigues*

### Límites convencionales a los estados de excepción y respuestas a la pandemia ..... 141

*Marcos Antonio Vela Ávalos*

**Vacunación contra la COVID-19:****¿Derecho o privilegio? El caso del Ecuador.....167***Camila Yáñez Coello***Presentación**

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es motivo de satisfacción la salida a la luz pública de su Revista IIDH número 72, la más reciente de una iniciativa pionera iniciada en 1985 que se ha prolongado durante 36 años. Esta edición contiene siete artículos que abordan asuntos relativos a los derechos humanos en el contexto de la pandemia mundial ocasionada por la COVID19.

Sin duda, la situación que esta ha generado sacudió a la comunidad internacional. Atender la emergencia sanitaria y pilotear las consecuentes estrategias en lo relativo a la salubridad y la economía no ha sido un desafío menor; para todos los países del orbe ha significado una amplia curva de aprendizaje. Este contexto generó nuevos obstáculos a la garantía de los derechos humanos y profundizó las brechas de desigualdad entre los grupos sociales que –de por sí– ya se encontraban marginados como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades rurales y las personas migrantes, por mencionar algunos. Adicionalmente, los recursos públicos e incluso privados se han volcado a la atención de la pandemia, colocando en muchos casos las prioridades de derechos humanos en un segundo plano o, al menos, disminuyendo la preocupación por las mismas.

Esto ha dejado para todos los actores de la comunidad internacional una serie de lecciones aprendidas; pero también de buenas prácticas que bien vale la pena identificar, difundir, monitorear, replicar y hasta cuestionar para transformarlas hacia mejores soluciones no solo para la situación sanitaria, sino para la

dignidad y los derechos de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En atención a ello, se aporta la presente edición de la Revista IIDH que incluye el análisis de diversas experiencias puntuales que se han suscitado en el marco de la COVID-19 y que pueden ser de utilidad para afrontar este escenario que aún persiste, cuyos efectos inmediatos y a mediano plazo también requerirán una atención con enfoque de derechos humanos.

Brevemente, a continuación se reseñan los artículos que contiene esta edición comenzando con la contribución titulada *O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas e o enfrentamento à COVID-19*, de Renato Zerbini Ribeiro Leão quien forma parte del Consejo Editorial de esta Revista. La importancia de su artículo reside en dar a conocer las preocupaciones y recomendaciones del órgano de interpretación, supervisión y seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la Organización de las Naciones Unidas, para el desarrollo de políticas públicas sobre la materia en un marco de afirmación del derecho a la salud respecto de la responsabilidad de los Estados desde la perspectiva de la protección internacional de los derechos humanos. Además de describir las características centrales del PIDESC y el Comité de Derechos Económicos y Sociales (CDESC) así como los pilares del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos, aborda las principales líneas argumentativas y las conclusiones de tres importantes documentos aprobados recientemente por el Comité: la *Observación general núm. 25, relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales* (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del 30 de abril de 2020; la *Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)* y

*los derechos económicos, sociales y culturales*, del 17 de abril de 2020; y la *Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, del 15 de diciembre de 2020.

*La crisis del SARS-COV-2 y el (fin del) individualismo nacionalista: la promoción de las directrices del SIDH en la protección de los refugiados en Brasil*, de Murilo Borges y Vinicius Villani Abrantes, se enfoca en analizar críticamente si tanto las políticas y los lineamientos del Estado brasileño como los de las organizaciones sociales involucradas en la atención a los refugiados apuntan a su inserción, con la necesaria asistencia médica y las ayudas pertinentes en el contexto de la crisis sanitaria. Su trabajo, considerado de carácter exploratorio y realizado con un enfoque cualitativo, además del análisis de textos especializados así como la legislación y las resoluciones nacionales e internacionales, parte de la hipótesis de que –debido a esta nueva realidad– los Estados deben abandonar la soberanía nacional individualista y, en un marco de cooperación global efectiva, responder a sus obligaciones internacionales ajustando sus acciones a los lineamientos internacionales e interamericanos para la protección de los derechos humanos en un entorno de solidaridad, fraternidad y cientificidad.

En su artículo *El derecho a la vivienda en el contexto de la pandemia mundial*, Alejandro Díaz Pérez se refiere a la mercantilización y la financiarización como unos de los obstáculos para la realización del derecho a la vivienda, lo que profundiza la desigualdad y da lugar a procesos discriminadores en el acceso a la vivienda –como la gentrificación– contra las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el texto hace énfasis en las consecuencias de la crisis sanitaria sobre el disfrute de este derecho –del que revisa los estándares internacionales para su debida protección en general y, particularmente, los

emitidos en el contexto de la pandemia— y cómo la falta de acceso a una vivienda adecuada también trae consigo una problemática que limita las posibilidades de resguardo y afrontamiento de la COVID-19; al respecto, revisa las medidas tomadas en algunos países y, finalmente, presenta posibles soluciones de protección a este derecho social.

El artículo titulado *La corrupción en la emergencia: repercusiones sobre los derechos humanos*, del abogado argentino Franco Gatti, contiene argumentaciones relativas a la relación entre ambos fenómenos en términos de que las prácticas corruptas pueden traer consigo afectaciones directas a determinados derechos humanos y podrían constituirse en presupuestos o antecedentes de otros incumplimientos a obligaciones nacionales e internacionales en la materia. Todo ello, señala, en un contexto de emergencia sanitaria en el que los Gobiernos incrementaron sus poderes discrecionales a la par de la reducción de las posibilidades de fiscalización. Esto ha llevado a que las decisiones públicas fueran atravesadas por la opacidad y, en algunos casos, se verificaran manifiestos casos de corrupción.

En *“Menos pedras, mais flores”: pelo direito à uma cidade mais humana em tempos de pandemia*”, Ana Célia Passos Pereira Campos e Igor de Souza Rodrigues se refieren al caso del padre Júlio Lancellotti y las piedras del viaducto Dom Luciano Mendes de Almeida, en la ciudad de São Paulo, como un ejemplo del proceso de exclusión y de la lógica higienista impuesta en las ciudades especialmente respecto de la pandemia de COVID-19. Campos y Rodrigues basan su análisis en la teoría del cifrado de poder del jurista Ricardo Sanín-Restrepo y las restricciones urbanísticas. Desde una perspectiva genealógica invita a pensar cómo los aspectos materiales arquitectónicos hostiles se apoyan en

una conformación histórica, simbólica y representativa de los sectores pobres urbanos. Finalmente, se discute la disociación entre las formas técnicas y las relaciones sociales.

Límites convencionales a los estados de excepción y respuestas a la pandemia, de Marcos Antonio Vela Ávalos, es un artículo en el que se estudian las medidas adoptadas durante esos escenarios decretados como respuesta a la pandemia por la COVID-19 en muchos países latinoamericanos, desde la perspectiva de la incompatibilidad de algunas de aquellas con los límites previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El autor se detiene en las que incidieron en las posibilidades reales de acceder a las garantías judiciales indispensables para proteger a los derechos humanos, así como en las disposiciones desproporcionadas o discriminatorias.

En *Vacunación contra el COVID-19: ¿derecho o privilegio? El caso del Ecuador*, Camila Yáñez Coello se propone cuestionar el actual proceso de vacunación masiva mundial; además, se pregunta acerca de las desigualdades globales y lo que se está haciendo en su país. Para el análisis se sirve de dos enfoques: las relaciones internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos. Con base en estos, describe un escenario en el que muchos países están en desventaja frente a otros en el combate de la pandemia y cómo tal problemática constituye una grave vulneración del derecho a la salud y al disfrute de los beneficios de los avances científicos así como de sus aplicaciones, lo cual también representa un grave peligro para la salud pública en el ámbito mundial.

Concluyo esta presentación con el agradecimiento de siempre a la cooperación noruega, sin cuyo apoyo no sería posible la producción y difusión de nuestra Revista 72; al Consejo Consultivo Editorial por sus valiosos aportes; y a

---

las autoras y autores por sus relevantes contribuciones sobre la relación entre la pandemia y los derechos humanos desde diferentes perspectivas. Sin duda, la pluralidad de las miradas y la interdisciplinariedad de los análisis serán de utilidad para las personas interesadas en ahondar en las consecuencias de esta situación inédita para quienes habitamos el planeta.

*José Thompson J.*

Director Ejecutivo, IIDH

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

# A CRISE DO SARS-COV-2 E O (FIM DO) INDIVIDUALISMO NACIONALISTA: A PROMOÇÃO DAS DIRETRIZES DO SIDH NA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NO BRASIL

*Murilo Borges\**

*Vinicius Villani Abrantes\*\**

## 1. INTRODUÇÃO

O ano é 2020 e o globo é oficialmente notificado de uma nova doença que, inicialmente, foi identificada na província de Wuhan, na República Popular da China. O que mais era temido mundialmente, em pouco tempo, aconteceu – a epidemia chinesa

---

\* Graduando em Direito, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e em Relações Internacionais, pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Pesquisador no Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional, na Linha de Pesquisa “Direito Internacional Crítico” (GEPDI/DICRÍ/CNPq/UFU). Colaborador do Projeto “Migração, Identidade e Cidadania” na FMP. Voluntário no Programa de Estágios do Instituto Brasileiro de Direito do Mar (IBDMAR/Brazilian Institute of Law of the Sea - BILOS).

\*\* Graduando em Letras, pela Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Juiz de Fora (FALE/UFJF) e em Direito, pela Faculdade de Direito, do Instituto Metodista Granbery (FMG). Pesquisador no Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional, na Linha de Pesquisa “Direito Internacional Crítico” (GEPDI/DICRÍ/CNPq/UFU). Colaborador Externo do Projeto de Extensão: “Pandemia e mundo: política em um mundo em transformação?”, realizado pela Faculdade de Ciências Sociais e pelo Núcleo de Estudos Globais, da Universidade Federal de Goiás (FCS/UFG). Pesquisador no Portal Direito Internacional sem Fronteiras, no projeto de pesquisa: “Os Direitos da Criança no Sistema Internacional”.

se transformou em uma pandemia de dimensões multilaterais<sup>1</sup>, gerando reações, consequências e efeitos em diversos setores sociais<sup>2</sup>.

Cada um dos países reagiu de uma maneira frente ao rápido avanço do *SARS-CoV-2* (causador da “Covid-19”); por diversas vezes, ficou evidente que no Brasil perpetuavam-se ações e diretrizes aquéns de uma efetiva responsabilidade social<sup>3-4</sup>. Dentro deste cenário, sabe-se que o Brasil é um dos receptores de refugiados, isto é, é um dos Estados de destino daqueles que decidem migrar por grave e generalizada violação de direitos

1 Senhoras, E. M. (2020). Coronavírus e Educação: análise dos impactos assimétricos. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 2(5), p. 128-136.

2 De acordo com Souza & Lima (2021, p. 415), “a origem, mutação, forma de contaminação, assim como os efeitos no organismo humano, ainda geram questões sem respostas precisas pela ciência”. Entretanto, sabe-se que o coronavírus, causador da Covid-19, consegue se propagar em uma rápida velocidade, nunca antes observada na história – chegando no Brasil, objeto da arte desta pesquisa, oficialmente, no dia 26 de fevereiro de 2020 (Brasil, 2020 *apud* Souza, M., & Lima, A. (2021). Direitos Humanos e Pandemia de Covid-19: análise a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. *Revista Jurídica UNICURITIBA*, 5(62), 412 - 442).

3 Abrantes, V. V. (2020). Brasil e a “Diplomacia da Saúde”: um recorte temporal da atuação do estado na pandemia de COVID-19. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 4(10), p. 11-27.

4 Em consonância com Abrantes (2020, p. 22), “[...] o Brasil está atuando de maneira oposta a muitos países considerados como referência no contexto da pandemia, para além disso, atua, em muitos casos, em contraposição com o que a Organização Mundial da Saúde está publicando com protocolo. [...] o país rompe com a linearidade diplomática e acaba se transformando no polo negativo de contraposição de teorias e práticas. O país perde o posicionamento consistente e estratégico no que se refere ao desenvolvimento de uma política “unida” de enfrentamento com os demais países da América do Sul – no que tange a esta política, a cooperação científica internacional poderia ser uma das iniciativas”. Abrantes, V. V. (2020). Brasil e a “Diplomacia da Saúde”: um recorte temporal da atuação do estado na pandemia de COVID-19. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 4(10), 11-27.

humanos, bem como por fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; – aqueles que estão em condição de refúgio sofrem com maior intensidade os efeitos perversos da pandemia da Covid-19<sup>5</sup>.

Nesta seara de incertezas, há, pois, que indagar: levando em consideração todos os esforços do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (“SIDH” ou “Sistema Interamericano”) durante o cenário pandêmico, as políticas diretrizes do Estado brasileiro, bem como das entidades não-governamentais realizaram a efetiva e humana inserção dos refugiados, como um grupo que também carece de medidas de auxílio para a contenção e recuperação dos efeitos e consequências – muitos, ainda não determinados – da pandemia da Covid-19? Esta indagação surge a partir da análise dos dados publicados pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)<sup>6</sup>, no qual esclareceu que até 31 de maio de 2020, havia 193.737 solicitações de refúgio à espera de julgamento no território nacional brasileiro, bem como das legislações publicizadas pelo Estado brasileiro que mostram graves e contrárias às diretrizes do SIDH na prevenção do vírus e proteção dos direitos humanos.

O objetivo geral da presente investigação, assim, é compreender os efeitos da pandemia da Covid-19 no cenário brasileiro, através de uma análise crítica do desenvolvimento

5 Siqueira, E. C. V. de., Silva, M. P. E., Costa, R. M. C. B., Abrantes, V. V., & Muniz-Falcão, W. H. M. (2020). A Pandemia de Covid-19, Direitos Humanos e Refúgio no Brasil. *Cadernos de Pesquisa Direito Internacional sem Fronteiras*, 2(1), p. 1-34.

6 Essas informações estão disponíveis no Portal do CONARE: <<https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros>>. Acesso em: 20 fev. 2021.

de diretrizes e políticas voltadas aos refugiados em território nacional, a fim de demonstrar a necessidade do rompimento de tomada de decisões isoladas pelos Estados frente às crises mundiais. Para cumprir com o problema de pesquisa e os objetivos dispostos, esta pesquisa, de caráter exploratório, utiliza a metodologia qualitativa, e se constrói o percurso de análise comparativa das diretrizes publicadas pelo SIDH no combate à crise sanitária e o (des)cumprimento das medidas tomadas pelo Estado brasileiro.

Este trabalho justifica-se pelo respectivo potencial – e também grande anseio – em auxiliar pesquisadores e profissionais no desenvolvimento crítico de futuras políticas e diretrizes sobre a problemática. Além disso, espera-se que este material possa se tornar um embasamento crítico e seguro para que a sociedade civil enxergue a problemática com novos olhares. Para uma melhor sistematização da temática, este manuscrito é dividido em três sessões de debate, com a finalidade de abordar, em ordem, sobre mecanismos de proteção aos refugiados a nível internacional e nacional; para que, assim, seja possível abarcar sobre a necessidade de inserção de diretrizes e protocolos advindos do Sistema Interamericano no combate de crises sanitárias e, por fim, o rompimento do individualismo nacionalista.

Dito isso, é possível extrair do cenário epidêmico que assola o globo mundial a carência do exercício de uma governança local isolada para o combate do vírus respiratório. Respeita-se, no entanto, o direito à liberdade dos Estados nas suas tomadas de decisões, mas enfatiza-se a sua soberania, posto que deixou de ser um direito absoluto<sup>7</sup>, tornando-se uma soberania relativa e que não deve ser invocada para a tomada de decisões desassociadas

7 Accioly, H.; Casella, P. B.; Silva, G. E. de N. (2009). *Manual de Direito Internacional Público*. São Paulo: Saraiva, 17, p. 280.

das diretrizes postas pelos Organismos Internacionais, tais como o Sistema Interamericano. Nessa toada, deve-se romper com a concepção clássica de Westfália sobre a implementação do Direito Internacional no Direito Interno, para que seja incorporado no âmbito interno dos Estados as recomendações internacionais, ainda que não possuam a vinculatividade obrigatória na sua jurisdição.

Outrossim, busca-se demonstrar a necessidade de um desenvolvimento sistemático das relações internacionais e de sua agenda a ser implementada pelos Estados de boa-fé, em um nível que atinja a maior e possível governança regional e global<sup>8</sup>, visando a promoção dos direitos humanos, sob os princípios da universalidade e efetividade do desenvolvimento humano<sup>9</sup>, através de uma movimentação jurídica que transpassa as próprias fronteiras estatais, sobretudo, no que tange a proteção dos refugiados nas crises globais.

## **2. ANÁLISE DO REFÚGIO E DA COVID-19 NO BRASIL: UMA DUPLA VULNERAÇÃO DE DIREITOS?**

Para além das legislações internacionais que o Brasil internalizou, o país também conta com instrumentos internos que perpassam sobre as migrações – incluindo neste grupo, os refugiados. A contextualização jurídica do refúgio, nesta seção, portanto, realiza-se pelas políticas brasileiras e internacionais que perpassam sobre o objeto da arte desta pesquisa – é importante mencionar que, muito embora o país tenha construído uma

8 Menezes, W. (2005). *Ordem Global e Transnormatividade*. Ijuí: Unijuí, p. 202.

9 Díaz, N. R. (2019). *Derecho a la seguridad social de los migrantes irregulares*. México: Revista IIDH, nº 70, p. 223

estrutura de direitos para os refugiados, o Brasil ainda está aquém de consolidar um posicionamento de proteção por parte da esfera federal; isto, por exemplo, pode ser visto pelas medidas restritivas (e por conseguinte, não inclusivas) tomadas frente à pandemia da Covid-19, no que tange aos refugiados.

## 2.1 A PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS NA ESFERA NACIONAL E INTERNACIONAL

Ao evocar a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), há que se evidenciar diversos direitos fundamentais e garantias que lá são expressos – isto como forma de firmar e positivar os direitos humanos advindos da proteção, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)<sup>10</sup>. Caberia aqui mencionar que a promulgação da Constituição Federal de 1988 fez com que o ordenamento jurídico brasileiro pudesse ser aberto para uma nova ordem internacional de proteção aos direitos da pessoa humana – isto porque norteia como as ações tomadas e realizadas, em âmbito nacional, devem ser embasadas, considerando preceitos de direitos humanos<sup>11</sup>.

10 De acordo com Cançado Trindade, a Declaração Universal de 1948, incorporada que foi em resolução do tipo declaratório da Assembleia Geral da ONU, sem pretender ter a força jurídica obrigatória de um tratado, com o tempo passou a ter um inegável impacto nas constituições, legislações e jurisprudências nacionais, assim como em tratados internacionais e demais resoluções da ONU. Tal impacto se tornou ainda mais considerável pelo lapso de tempo prolongado (18 anos) entre a adoção da Declaração e a dos dois Pactos (e Protocolo Facultativo) em 1966<sup>25</sup>, que levou alguns intérpretes a sugerir que possivelmente alguns dos princípios da Declaração tenham hoje se tornado “obrigatórios” como parte do direito internacional consuetudinário (Cançado Trindade, A. A. (2017). *Princípios do Direito Internacional Contemporâneo*. Brasília: FUNAG, p. 391-392).

11 Mazzouli, V. de O. (2007). *Curso de Direito Internacional Público*. São Paulo: Revista dos Tribunais.

Nessa perspectiva, é evidente que a proteção do migrante perpassa por princípios constitucionais, dessa maneira, a realização de quaisquer políticas destinadas aos refugiados deve estar em consonância com os princípios e parâmetros da legalidade e da constitucionalidade – isto é, implica no reconhecimento de direitos e conseqüentemente os respectivos efeitos jurídicos por atos ou omissões<sup>12</sup>. Após a promulgação da Constituição da República (1988), é criada a Portaria Ministerial 394 que facilita os procedimentos de solicitação de refúgio no Brasil – dessa maneira, o Brasil retira as reservas realizadas aos dispositivos 15 e 17 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada internamente em 1961<sup>13</sup>.

Conforme aponta Abrantes e Romero (2020)<sup>14</sup>, o Estatuto dos Refugiados (Lei n.º 9.474, de 1997) é um grande produtor do Programa Nacional de Direitos Humanos de 1996, sendo o projeto de lei analisado, de acordo com Jubilut (2007), por diversas Comissões nacionais – Comissão de Direitos Humanos, Constituição e Justiça, e de Relações Exteriores. O Estatuto supracitado apresenta:

[...] a ampliação da definição de refugiado, incluindo as pessoas que fogem de graves e generalizadas violações de direitos humanos. O Estatuto dos Refugiados é considerado, portanto, um dos grandes passos, na época, para a efetivação dos refugiados no ordenamento jurídico brasileiro. Cabe salientar que ele aponta diretrizes importantes para o procedimento e reconhecimento de refúgio, bem como o estabelecimento do

12 Bucci, M. P. D. (2006). “O Conceito de Política Pública em Direito”. In: *Políticas Públicas: Reflexões sobre o Conceito Jurídico*. São Paulo: Editora Saraiva.

13 Abrantes, V. V.; Romero, T. G. (2020). Vozes silenciadas das migrações de crise no Brasil: “Para que Língua de Acolhimento?”. *Revista E-civitas*, 13(2), p. 263-286.

14 *Ibidem*.

Comitê Nacional para os Refugiados, doravante, CONARE (Abrantes & Romero, 2020, p. 270).

Em raciocínio vizinho, a Declaração de Cartagena (de 1984) estipula importantes parâmetros para criar uma harmonização do sistema internacional às realidades regionais e esforços nacionais das Américas. Percebe-se, então, que o Estatuto dos Refugiados fica em consonância com a ampliação do conceito de refúgio determinado pela Declaração de Cartagena – “o sistema de proteção apresentou evoluções importantes, no decorrer dos anos, mas é possível perceber que [...] ainda não atend[e] às necessidades das migrações transnacionais, da qual o Brasil é um dos países de destino”<sup>15</sup>.

Nesta perspectiva, é válido mencionar que, em 2017, com a aprovação da Lei n.º 13.445, o Brasil se coloca em outro patamar no que se refere a proteção dos direitos dos migrantes<sup>16</sup>. Diversos autores, como Moura & Paluma (2020)<sup>17</sup>, apontam que a desburocratização do processo de regularização migratória, bem como o estabelecimento de vistos humanitários foram as grandes mudanças. Fica nítido que “[...] o novo dispositivo se preocupa em tratar a figura do não nacional como migrante pleno de direitos garantidos por todo território nacional, em condição de igualdade com os nacionais”<sup>18</sup>. Isto é, o novo dispositivo concretiza o disposto no artigo 5º da Constituição da República (1988) – estabelecendo a igualdade entre nacionais e não nacionais combatendo a xenofobia, a discriminação e as práticas que ofendem os direitos humanos.

15 *Op. Cit.*, p. 271.

16 Moura, T. P.; Paluma, T. (2020). A lei de Migração 13.445/2017 e seus precedentes históricos: a evolução do conceito de não nacional no ordenamento jurídico brasileiro. In: Silva, R. C. da S.; Abrantes, V. V. *Reflexões iniciais sobre direito internacional*. Curitiba: Brazil Publishing.

17 *Ibidem*.

18 *Ibidem*, p. 48.

Na ambiência internacional, em 2018, é firmado o “Pacto Global para a Migração”<sup>19</sup> – uma grande oportunidade para aprimorar a cooperação internacional entre os Estados, no que tange ao fortalecimento da proteção aos migrantes<sup>20</sup>. O referido

19 United Nations. (2018, julho). *Global compact for safe, orderly and regular migration*. Final draft. 11 jul. 2018. Disponível em: [https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713\\_agreed\\_outcome\\_global\\_compact\\_for\\_migration.pdf](https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf). Acesso em 14 fev. 2021.

20 O Pacto estabelece 23 objetivos para a cooperação internacional em relação à imigração. Dentre eles: (I) Coletar e utilizar dados precisos e desagregados como base para políticas; (II) Minimizar os fatores adversos e os fatores estruturais que obrigam as pessoas a deixarem seus países de origem (III) Fornecer informações precisas e oportunas em todos os estágios da migração; (IV) Assegurar que todos os migrantes tenham prova de identidade legal e documentação adequada; (V) Aumentar a disponibilidade e a flexibilidade dos caminhos para a migração regular; (VI) Facilitar o recrutamento justo e ético e salvaguardar condições que garantam um trabalho decente; (VII) Abordar e reduzir vulnerabilidades na migração; (VIII) Salvar vidas e estabelecer esforços internacionais coordenados em migrantes desaparecidos; (IX) Reforçar a resposta transnacional ao contrabando de migrantes (X) Prevenir, combater e erradicar o tráfico de pessoas no contexto internacional migração; (XI) Gerenciar as fronteiras de forma integrada, segura e coordenada; (XII) Reforçar a certeza e previsibilidade nos procedimentos de migração para triagem, avaliação e encaminhamento; (XIII) Usar a detenção de migração apenas como uma medida de último recurso e trabalhar para alternativas; (XIV) Reforçar a proteção, assistência e cooperação consulares em toda o ciclo de migração; (XV) Fornecer acesso à serviços básicos para migrantes; (XVI) Capacitar os migrantes e as sociedades para a plena inclusão e coesão social; (XVII) Eliminar todas as formas de discriminação e promover o discurso público baseado em evidências para moldar percepções de migração; (XVIII) Investir no desenvolvimento de competências e facilitar o reconhecimento mútuo de competências, qualificações e competências; (XIX) Criar condições para os migrantes e as diásporas contribuírem plenamente para o desenvolvimento sustentável em todos os países; (XX) Promover uma transferência de remessas mais rápida, segura e mais barata e promover a inclusão financeira dos migrantes; (XXI) Cooperar para facilitar o regresso e a readmissão seguros e dignos, bem como reintegração sustentável; (XXII) Estabelecer mecanismos para a portabilidade dos direitos de segurança social e benefícios, e (XXIII) Fortalecer a cooperação internacional e as parcerias globais para garantir a segurança, ordenação e migração regular.

Pacto não é um instrumento vinculante – isto é, é um mecanismo de *soft law*, baseado em valores como responsabilidade internacional, direitos humanos e cooperação em prol de migrações justas e igualitárias. Contudo, o Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores, em 2019, deixou o Pacto<sup>21</sup>.

## 2.2 A (DES)PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NAS MEDIDAS ADOTADAS PELO ESTADO BRASILEIRO NA CONTENÇÃO DA COVID-19

O funcionamento de todas as Instituições durante um Estado de Exceção<sup>22</sup> – como advindo da crise sanitária global – é imprescindível para a manutenção e proteção dos direitos humanos frente às crises globais<sup>23</sup>. Isso porque, a vida humana torna-se ainda mais vulnerável e dependente do controle das

21 Conectas. (2019, janeiro). Governo Bolsonaro Deixa Pacto Global Para Migração: Decisão pode ter impacto nos cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Conectas: Direitos Humanos. Disponível: [https://www.conectas.org/noticias/governo-bolsonaro-deixa-pacto-global-para-migracao?gclid=CjwKCAiAsaOBBhA4EiwAo0\\_AnGFhUcTMEEGItu7-5tdLb10BzOEktWHsaw0xv67zWunDsp3wE4UWhoCrhAQAvD\\_BwE](https://www.conectas.org/noticias/governo-bolsonaro-deixa-pacto-global-para-migracao?gclid=CjwKCAiAsaOBBhA4EiwAo0_AnGFhUcTMEEGItu7-5tdLb10BzOEktWHsaw0xv67zWunDsp3wE4UWhoCrhAQAvD_BwE). Acesso em: 21 de fev. 2021.

22 O Estado de Exceção (ou emergência) é caracterizado pela suspensão temporária de direitos e garantias constitucionais, que proporcionam a necessária eficiência na tomada de decisões para casos de proteção do Estado, já que a rapidez no processo de decidir as medidas a serem tomadas é essencial em situações emergenciais e, nesse sentido, nos regimes de governo democráticos — nos quais o poder é dividido e as decisões dependem da aprovação de uma pluralidade de agentes — a agilidade decisória fica comprometida (CORTE IDH. *Caso Durand e Ugarte Vs. Peru*. Sentença de 16 de agosto de 2000. Disponível em: <[https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_68\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_68_esp.pdf)>. Acesso em: 21 fev. 2021, p. 97).

23 Corte IDH. Parecer Consultivo nº 09. *Garantias Judiciais em Estados de Emergência*. 06 de outubro de 1987. Disponível em: <[https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_09\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf)>. Acesso em: 21 de fev. 2021, p. 40.

políticas estatais ou da falta delas na tutela das emergências<sup>24</sup>. No Brasil, dado o sistema tripartite de poderes, o funcionamento dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário não podem ser interrompidos.

A partir disso, denota-se uma preocupação em relação às ações e estratégias brasileiras de contenção do vírus respiratório da Covid-19, nas quais excluem os migrantes ou solicitantes de refúgio. Percebe-se que além das medidas de prevenção, como a determinação de *lockdown* e distanciamento social, o Estado brasileiro iniciou um processo legislativo de Decretos e Portarias relacionadas à proibição de entrada e saída do país<sup>25</sup>.

24 Agamben, G. *Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua I*. Tradução Henrique Burigo, 2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2010, p. 166-167.

25 De acordo com Abrantes (2020, p. 22), “(...) [é] nitido que o Brasil está atuando de maneira oposta a muitos países considerados como referência no contexto da pandemia, para além disso, atua, em muitos casos, em contraposição com o que a Organização Mundial da Saúde está publicando com protocolo. Nesse contexto, então, o país rompe com a linearidade diplomática e acaba se transformando no polo negativo de contraposição de teorias e práticas. O país perde o posicionamento consistente e estratégico no que se refere ao desenvolvimento de uma política “unida” de enfrentamento com os demais países da América do Sul – no que tange a esta política, a cooperação científica internacional poderia ser uma das iniciativas”. Vide: Abrantes, V. V. (2020). Brasil e a “Diplomacia da Saúde”: um recorte temporal da atuação do estado na pandemia de COVID-19. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, 4(10), 11-27. O referido autor (Abrantes, 2020), ao mencionar a atuação contrária aos preceitos diplomáticos e também de direitos humanos, faz menção, dentre tantas questões, a políticas que envolvam grupos vulneráveis. Além disso, a falta de diretrizes que sejam inclusivas reforça a ideia de micropolíticas – “a expressão máxima da soberania relacionada com o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer - e quem morre sempre? A resposta pode ser: os grupos vulneráveis”. (Abrantes, V. V. (2021). O Morto que Tebas Renegou? Direitos Humanos, Pandemia de COVID-19 e o Retorno de Antígona. *Boletim De Conjuntura (BOCA)*, 5(13), p. 153).

Em um primeiro momento, o Estado brasileiro editou a Lei nº 13.979<sup>26</sup>, de 06 de fevereiro de 2020, regulamentada e operacionalizada pela Portaria nº 356<sup>27</sup>, de 11 de março de 2020, ambas para estabelecer as medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. Já em 20 de junho de 2020, o Governo Federal brasileiro emitiu a Portaria nº 319<sup>28</sup>, na qual determinou como medida excepcional, o fechamento das fronteiras, proibindo a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no país, sob o argumento de que seria a única forma de contenção da propagação do vírus. Ocorre que tal decisão é incompatível com todos os parâmetros internacionais e interamericanos (*vide* seção 3), posto que o fechamento total de uma fronteira reforça o problema sanitário, uma vez que as pessoas em situação de migração passam a ter de correr novos riscos para escapar de seus países, visto que terão mais obstáculos, tornando-as cada vez mais visíveis, bem como reforçam o preconceito e a xenofobia ao barrarem as pessoas estrangeiras no país.

No ponto, destaca-se que a Organização Mundial da Saúde (OMS) se posicionou de forma contrária a estas restrições generalizadas de viagens e de comércio durante maior do que alguns dias, apontando a ineficácia dessas medidas na prevenção da propagação do vírus, uma vez que seu impacto econômico

26 Brasil. (2020, fevereiro). Lei nº 13.979. Disponível: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735>>. Acesso em: 21 fev. 2021.

27 Brasil. (2020, março). Portaria nº 356. Disponível: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346>>. Acesso em: 21 fev. 2021.

28 Brasil. (2020, junho). Portaria nº 319. Disponível: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-262502191>>. Acesso em: 21 fev. 2021.

e social se torna negativo, além do seu potencial de distrair a atenção das medidas que podem impedir a disseminação do vírus<sup>29</sup>.

Não obstante, em 29 de julho de 2020, o Governo brasileiro<sup>30</sup> prorrogou o disposto na Portaria nº 319, com a flexibilização do funcionamento e acesso dos aeroportos. Evidenciando, novamente, a discriminação contra as pessoas em situação de refúgio e migrantes. Ponto muito importante é o disposto no artigo 4º, inciso III e parágrafo único, da referida prorrogação, na qual determinou “[...] *as restrições de que trata esta Portaria não impedem [...] o livre tráfego do transporte rodoviário de cargas, ainda que o motorista não se enquadre no rol de que trata o art. 3º, na forma prevista na legislação. Parágrafo único. O disposto no inciso II do caput não se aplica à fronteira com a República Bolivariana da Venezuela*”. Demonstrando, assim, uma discriminação direta com os refugiados e migrantes advindos da Venezuela. O que enseja uma contrariedade a uma das ações humanitárias promovidas pelo Brasil em 2018, denominada “Operação Acolhida”, que criou diversas ações de recepção na fronteira para os venezuelanos, como serviços de identificação, orientação sobre regularização migratória e atenção inicial de saúde, dentre outras ações<sup>31</sup>.

29 Leão, A. V. & Fernandes, D. Aspectos de Imigração no Contexto da Pandemia da Covid-19. In: Impactos da Pandemia de Covid-19 nas Migrações Internacionais no Brasil - Resultados de Pesquisa. São Paulo: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”. NEPO/UNICAMP, 2020, p. 20.

30 BRASIL. (2020, julho). Portaria CC-PR/MJSP/MINFRA/MS nº 01. Disponível: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-cc-pr/mjsp/minfra/ms-n-1-de-29-de-julho-de-2020-269235614>>. Acesso em: 21 fev. 2021.

31 OPERAÇÃO ACOLHIDA. Ordenamento da fronteira em números. Disponível em: <<https://www.gov.br/acolhida/historico/>>. Acesso em: 21 fev. 2021; LEÃO, Augusto Veloso; FERNANDES, Duval. Aspectos de Imigração no Contexto da Pandemia da Covid-19. In: Impactos da Pandemia da Covid-19 nas Migrações Internacionais no Brasil - Resultados de Pesquisa. São Paulo: Núcleo de Estudos

De forma agravante, a Portaria nº 419<sup>32</sup>, reitera as restrições terrestres e aéreas, estabelecendo que o descumprimento do seu texto pode ensejar uma responsabilização na esfera civil, administrativa e penal, conseqüentemente, poderá ensejar a repatriação ou deportação<sup>33</sup> imediata e inabilitação do pedido de refúgio. Além do mais, em 12 de fevereiro de 2021, foi emitida uma nova diretriz, através da Portaria nº 62<sup>34</sup>, na qual autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, para o auxílio das agências de segurança pública estaduais nas atividades de bloqueio excepcional e temporário de entrada no país de estrangeiros, em caráter episódico e planejado, por 60 dias, a contar de 18 de fevereiro de 2021 até 18 de abril de 2021.

Todas as referidas proibições e punições, ainda que sob o argumento da contenção do vírus, mostram-se contrárias com a própria Lei de Migrações (nº 13.445)<sup>35</sup>, instituída pelo Brasil, em 2017, na qual proíbe a deportação sem o devido processo legal, bem como que impede a devolução de pessoas ou negativa de pedido de refúgio sem análise do mérito da causa em questão.

---

*de População “Elza Berquó”*. NEPO/UNICAMP, 2020, p. 25.

32 BRASIL. (2020, junho). Portaria nº 419. Disponível: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-419-de-22-de-junho-de-2020-262970317>>. Acesso em: 21 fev. 2021.

33 No ponto, destaca-se que o Brasil deportou 2.901 pessoas em 2020, o que evidencia um aumento de 5.708% na comparação com o ano de 2019, quando 36 estrangeiros foram deportados do país. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/02/21/deportacoes-de-estrangeiros-crecem-5708percent-no-brasil-em-2020.ghtml>>. Acesso em: 21 fev. 2021.

34 BRASIL. (2021, janeiro). Portaria GM/MS nº 62. Disponível: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-62-de-14-de-janeiro-de-2021-299113784>>. Acesso em: 21 fev. 2021.

35 BRASIL. (2017, maio). Lei nº 13.445. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm)>. Acesso em: 21. fev. 2021.

Nesse norte, há uma dupla vulneração de direitos no que tange aos refugiados e migrantes. As medidas do Estado brasileiro mostraram-se precárias, ao passo que permitem a entrada de turistas, mas não de solicitantes de refúgio que chegam nas fronteiras do Estado. Ademais, percebe-se que nos casos em que as medidas tomadas contra os movimentos migratórios são mais duras e têm maiores duração do que aquelas tomadas com relação à circulação de pessoas dentro dos países, nos centros urbanos afetados pela Covid-19 e aquelas relacionadas à movimentação de turistas, sendo perceptível que a associação entre o estrangeiro e a doença acompanha a história das epidemias e mantém, até hoje, o seu potencial de induzir ou justificar violações de direitos humanos<sup>36</sup>.

Por essas razões, deve-se promover o alinhamento das ações do Estado brasileiro com as diretrizes internacionais e interamericanas, a serem demonstradas na próxima seção, posto que isso influencia diretamente na cooperação que os Governos devem iniciar, a fim de garantir apoio direcionado às pessoas e grupos mais afetados pela doença ou mais vulneráveis aos impactos negativos do vírus.

### **3. O ROMPIMENTO DA SOBERANIA NACIONAL E A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DO SIDH NO COMBATE À CRISE SANITÁRIA E NA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS**

Como já demonstrado ao longo da investigação, a crise sanitária advinda da Covid-19 evidenciou a necessidade do

---

36 LEÃO, Augusto Veloso; FERNANDES, Duval. Aspectos de Imigração no Contexto da Pandemia da Covid-19. In: Impactos da Pandemia da Covid-19 nas Migrações Internacionais no Brasil - Resultados de Pesquisa. São Paulo: *Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”*. NEPO/UNICAMP, 2020, p. 20.

rompimento de uma visão individualista nacionalista dos Estados<sup>37</sup>, dada a extrema urgência de promover uma governança global<sup>38</sup> no combate do vírus respiratório e na proteção dos direitos humanos no plano interno dos Estados.

Nesse sentido, reconhecendo o papel fundamental da Organização Mundial da Saúde (OMS), sobretudo, do seu Regulamento Sanitário Internacional (IHR), vinculante aos cento noventa e seis Estados membros da Constituição da OMS<sup>39</sup>, também devemos promover o reconhecimento do papel do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH) no combate à crise. Isso porque, assim como a OMS, circunstanciada no regime da Organização das Nações Unidas (ONU), o SIDH, com base no regime dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, regido pela Organização dos Estados Americanos (OEA), vêm promovendo inúmeras diretrizes e recomendações através da Comissão Interamericana (CIDH) e da Corte Interamericana ( “Corte IDH”) a serem seguidas pelos Estados que ratificaram tanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), quanto a competência contenciosa da Corte IDH.

37 MENEZES, W.; MARCOS, H. (2020). O Direito Internacional e a Pandemia: Reflexões Sistêmico-Deontológicas. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia: Uberlândia*, 48(2), p. 44.

38 A governança global se caracteriza pela busca de aumentar a cooperação entre diversos atores econômicos, políticos e sociais; tornando as tomadas de decisões mais previsíveis dentro de áreas específicas, nas quais abrangem mais do que apenas um governo, incluindo todas as instituições, mas também implicando em mecanismos informais e formais, de caráter não governamental (Borges, M. (outubro, 2020a). A atuação das Organizações Internacionais na Proteção dos Direitos Humanos. *Revista Relações Exteriores*. Disponível em: <<https://relacoesexteriores.com.br/a-atuacao-das-organizacoes-internacionais-na-protecao-dos-direitos-humanos/>>. Acesso em: 10 de fev. 2021).

39 *Op. Cit.*, p. 49.

Em primeiro lugar, relembra-se o Parecer Consultivo nº 18, de 2003, em que a Corte IDH foi categórica ao determinar a natureza vinculante dos princípios de igualdade e de não-discriminação aos migrantes documentados e indocumentados. Reconheceu, assim, a impossibilidade dos Estados discriminarem migrantes, ainda que não estejam com a documentação legal no Estado locado. Sobretudo, no que tange a inserção dos migrantes no gozo de políticas públicas<sup>40</sup>.

Seguindo nessa linha, em 10 de abril de 2020, coadunando-se com a declaração da OMS, em 11 de março de 2020, estabelecendo o Estado de Pandemia, considerando as mais de 118 mil infecções em 114 nações àquela época<sup>41</sup>, a CIDH emitiu a Resolução nº 01/2020<sup>42</sup>, intitulada como “*Pandemia e Direitos Humanos nas Américas*”, buscando servir como parâmetro para as medidas adotadas pelos Estados no combate e erradicação do vírus.

Extraí-se da resolução que os Estados-membros devem evitar a implementação de estratégias de detenção migratórias e outras medidas que aumentem os riscos de contaminação e propagação do vírus; abster-se de medidas que possam obstaculizar, intimidar e desestimular o acesso das pessoas em situação de mobilidade

40 CORTE IDH. Parecer Consultivo nº 18. *A Condicao Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados*. 17 de setembro de 2003, p. 172. Disponível em: <[https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_18\\_por.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_por.pdf)>. Acesso em: 10 de jan. 2021.

41 No dia 15 de janeiro de 2021, estimou-se o número de mortes globais por Covid-19 em 2 milhões. De acordo com o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, o impacto mortal da pandemia foi agravado pela ausência de um esforço global coordenado”. Disponível em: <<https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738882>>.

42 “[...] a CIDH aprova a presente resolução que estabelece padrões e recomendações, com a convicção de que as medidas adotadas pelos Estados na atenção e contenção da pandemia devem ter como centro o pleno respeito aos direitos humanos”. Disponível em: <<https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/Resolucao-1-20-pt.pdf>>.

humana; garantir o direito de regresso e a migração de retorno aos Estados e territórios de origem; implementar medidas para prevenir e combater a discriminação contra migrantes; e, também incluir expressamente as populações em situações de mobilidade humana nas políticas e ações de recuperação econômica necessárias em todos os momentos da crise<sup>43</sup>.

Posteriormente, a CIDH enfatizou os grandes desafios à proteção integral dos direitos dos refugiados e salientou que os Estados devem adotar medidas eficazes e urgentes no contexto da pandemia. Para tanto, considera-se que a mobilidade humana advém de um conjunto complexo de elementos que se dão por inúmeros fatores, podendo ser na busca de condições melhores de vida, ou, também pela expulsão<sup>44</sup>. Destacando que não devem os Estados implementarem bloqueios de acesso, posto que isso resulta em um aumento no uso de rotas informais e passagens de fronteira inseguras e mais violentas, colocando as pessoas em uma vulnerabilidade ainda maior.

Fato importante é que de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados<sup>45</sup>, o ano de 2020 vivenciou cerca de 18,7 milhões de pessoas que se encontram deslocadas no globo, com especial destaque aos venezuelanos que buscam proteção devido à crise humanitária na Venezuela. Percebeu-

43 CIDH. (2020, abril). *Revoluciono nº 1/20. Pandemia e Direitos Humanos nas Américas*. p. 58. Disponível em: <<https://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/pdf/Resolucao-1-20-pt.pdf>>. Acesso em: 10 jan. 2021.

44 CIDH. (2020, junho). Comunicado 140/20: *Por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados, a CIDH observa os grandes desafios para a proteção integral dos direitos dos refugiados e insta os Estados a adotarem medidas eficazes e urgentes no contexto da pandemia da COVID-19*. Disponível em: <<https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/142.asp>>. Acesso em: 10 jan. 2021.

45 UNHCR. (2020, junho). *How many refugees are there around the world?* Disponível em: <<https://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html>>. Acesso em: 10 de jan. 2021.

se no Triângulo Norte da América Central, estimadas 800 mil pessoas deslocadas, devido a pobreza, ação de quadrilhas criminosas e dentre outros.

Não obstante, em relação à recuperação da presente crise sanitária que acarretou a uma crise humanitária e econômica, a CIDH<sup>46</sup> reitera que os migrantes e os refugiados devem ser incluídos nos planos diretórios de recuperação, de maneira inclusiva. Proporcionando, assim, o acesso a serviços básicos de saúde, bem como enfatiza que a vacinação para a prevenção do vírus independe do status migratório e documentado das pessoas em situação de mobilidade humana.

Diante disso, reconhecendo que o voluntarismo estatal é indispensável para a existência de algumas áreas do Direito Internacional, sobretudo, no que tange a proteção dos Direitos Humanos no plano interno dos Estados<sup>47</sup> e que os entes não podem ser responsabilizados internacionalmente por obrigações que não foram assumidas no plano internacional na ótica do voluntarismo estatal, a atual crise evidencia a imprescindível necessidade dos Estados agirem de acordo com os parâmetros internacionais aos quais fazem parte, como é o caso do Estado brasileiro, que reconheceu a CADH em 1969, bem como a competência contenciosa obrigatória da Corte IDH em 2002, através do Decreto nº 4.463. Isso porque, o vírus denota

46 CIDH. (2020, dezembro). Comunicado 303/20: *As pessoas migrantes devem estar incluídas em todos os planos de recuperação relacionados à COVID-19 – afirmam especialistas regionais e da ONU*. Disponível em: <<http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/303.asp>>. Acesso em: 10 jan. 2021.

47 BORGES, M. (2020b). Direito constitucional brasileiro e o fortalecimento das Cortes Internacionais: A importância de utilizar os Precedentes Internacionais na Proteção dos Direitos Humanos. *Polifonia: Revista Internacional da Academia Paulista de Direito*, 5 (2), p. 353.

problemas globais, com complexos desafios que obriga a utilização dos instrumentos internacionais na adoção de medidas na proteção da humanidade<sup>48</sup>.

Por essas razões, os Estados devem assegurar que a grave situação sanitária não se torne uma segunda crise de direitos humanos. Devem adotar medidas que se coadunem com as diretrizes do SIDH, na erradicação de obstáculos e impedimentos de acesso aos migrantes e refugiados no território estatal. Especialmente, aos Estados-membros da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), não devem eximir de cumprir as suas disposições ou de outros tratados internacionais, ainda que em um Estado de Emergência, consoante artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969.

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou demonstrar que a pandemia da Covid-19 explicitou a carência das tomadas de decisões de Governos que optaram por uma governança local isolada, sob o argumento de um nacionalismo, no combate da crise sanitária e na ineficácia de promoção dos direitos humanos dos refugiados. Para isso, foi analisado que o Brasil se deparou com um grande crescimento do fluxo migratório – que tem o país como Estado de destino –, no qual obrigou diversas instituições a se adaptarem para atender e auxiliar no processo de acolhimento e integração dos refugiados – isto é, nas lacunas estatais, o terceiro setor vem atuando veemente para preencher tais faltas.

---

48 MENEZES, W.; MARCOS, H. (2020). O Direito Internacional e a Pandemia: Reflexões Sistêmico-Deontológicas. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia: Uberlândia*, 48(2), p. 73.

Para tanto, o direito possuiu um papel muito importante na conformação das instituições que arquitetam e realizam as políticas públicas – no ponto, a atuação das esferas governamentais corresponde, portanto, à forma definida pelo direito. Cumpre mencionar aqui também que o direito tem como base analítica a ideia de justiça, sendo sua grande essência pautada na compreensão de que tal virtude não está apenas embasada na aplicação sistemática e formal das leis, mas na técnica de igualdade e de ordem social para com todos. Ocorre que pôde-se observar durante a pandemia que a atuação governamental não refletiu as perspectivas asseguradas pela legislação e pelos organismos internacionais na proteção dos direitos humanos (legislações que são importantes no desfrute, fruição e respeito à dignidade da pessoa humana). Isto é, fica evidente que, se por um lado, a proteção aos refugiados sofreu modificações no sistema brasileiro, por outro, também trouxe diversos artificios de protecionismo nacionalista.

Viu-se que o Estado brasileiro optou por elaborar legislações, como a Lei nº 13.979, e Portarias nº 356, 319 e 419, dentre outras que inseriram medidas como o fechamento total das fronteiras, bem como penalidades - administrativas, civis e penais - às pessoas que descumprirem as determinações, sob o argumento de que seria a única forma de contenção da propagação do vírus, mesmo que tal decisão seja contrária às diretrizes publicadas tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto pelo Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos.

Nessa esfera, sob o protagonismo de uma soberania nacionalista, percebe-se uma dupla crise no que tange os refugiados: sanitária e humanitária. Ora, as medidas tomadas pelo Brasil mostram-se contrárias aos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e, sobretudo, (des)protetivas aos refugiados e migrantes que necessitam migrar durante este

momento epidêmico, especialmente os Venezuelanos. O que se propõe, assim, é que o Brasil, enquanto Estado-membro do SIDH, (re)análise as medidas adotadas durante a crise sanitária, para que inclua as pessoas em situação de refúgio e migração nos planos e políticas públicas tanto em matéria de saúde, quanto em matéria econômica, como disposto pela Resolução nº 01 de 2020, publicada pela Comissão Interamericana.

Por fim, cabe salientar que toda a humanidade requer ideias e ações solidárias e que sempre os Estados adotem posturas que se voltem a preceitos como o da solidariedade, fraternidade e da cientificidade perante a todos. Demonstrar que as ações estatais devem estar em consonância com os parâmetros do SIDH e que não é possível sustentar uma soberania nacional frente a crises globais.